



Tribunal Fiscal de la Nación

Año del Sexagésimo Aniversario del TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN

Buenos Aires, de de 2020,
AUTOS Y VISTOS

El Expte. N° 46.931-I caratulado “MACRO FUNDAMENTALS S.A. s/ recurso de apelación – Impuesto a las Ganancias” y

CONSIDERANDO:

I. Que, a fs. 87/98 la actora interpone recurso de apelación contra la resolución N° 77/2016 (DV DEOB) de la A.F.I.P. -Dirección General Impositiva- de fecha 6 de Junio de 2016, suscripta por el Jefe (Int.) de la División Determinaciones de Oficio “B” del Departamento Técnico Grandes Contribuyentes Nacionales, mediante la cual se determina de oficio la obligación impositiva de la recurrente en el Impuesto a las Ganancias correspondiente a los períodos fiscales 2009 a 2012, imponiéndole la obligación de ingresar en concepto de impuesto la suma de \$ 1.082.115,24.-, con más la suma de \$ 1.920.211,39.- en concepto de intereses resarcitorios, y aplicándose multa por la suma de \$ 757.480,67.- equivalente al 70% (setenta por ciento) del impuesto presuntamente omitido con sustento en el artículo 45 de la ley de rito.

De modo preliminar, la recurrente expresa que el presente tuvo inicio a causa de la consideración efectuada por el organismo fiscal respecto de la no inclusión en las declaraciones juradas de los ejercicios fiscales ya mencionados de la **renta derivada de la cesión en comodato de un inmueble de forma gratuita a favor del presidente de la sociedad y su esposa**, lo que fuera considerado por el Fisco Nacional como una disposición de fondos a favor de terceros en los términos del art. 73 de la ley del gravamen (fs. 87 vta.).

Señala que la recurrente es una empresa dedicada principalmente a la prestación de servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial y que esos servicios se prestan por intermedio de la actividad de sus socios, razón por la que no puede considerarse que estos revistan el carácter de terceros (fs. 87 vta.) ni que la utilización del inmueble por parte de estos e integrado por esos mismos socios implique una situación de “disposición” tal como el Fisco pretende (fs. 88).

Sostiene que el inmueble en cuestión fue aportado por el Sr. Broda y su esposa para que la recurrente pueda desarrollar su actividad que es el asesoramiento anteriormente apuntado, mas no actividad inmobiliaria alguna ni el alquiler de inmuebles, los que no se encuentran contemplados dentro del objeto social de la firma, lo que -a su entender- determina que el destino brindado al inmueble de referencia fue para el uso funcional de sus socios para el cumplimiento de los objetivos societarios (fs. 88 vta.).

Por otro lado, detalla que el presente caso se trata de una serie de **hostigamientos de parte de la Administración Fiscal, que se hubieron iniciado durante la anterior gestión de gobierno y que una vez producido el cambio de administración, el hostigamiento no habría cesado** (fs. 90/90 vta.). A su vez, sintetiza que en el presente caso el

organismo recaudador se aparta de los términos expresados en el marco de una consulta vinculante emitida por la asesoría jurídica del ente el 20/10/2005 (Dictamen DI ALIR N° 4/2005), en tanto se consideró en otra oportunidad que la cesión gratuita en comodato respondía al interés de la empresa (fs. 90 vta.).

Una vez más, sostiene la parte actora que ni el Sr. Broda ni su familia son terceros, ni el uso del inmueble -único inmueble que integra su capital-, ni tampoco el uso de la propiedad que se realiza constituye un acto contrario al interés de la empresa (fs. 91).

Por su parte, analiza la naturaleza jurídica del contrato de comodato y el carácter esencial de la gratuidad que lo distingue, así como también en cuanto a lo que debe interpretarse de acuerdo a la ley general como tercero en el ordenamiento jurídico. Desarrolla su razonamiento en torno a la distinción entre una persona física y una persona jurídica, y a lo que debe o no ser interpretado como tercero a la luz de dicha vinculación entre las personas inicialmente mencionadas, y finaliza afirmando que terceros son los que no son socios ni han tenido “*nada que ver*” en el contrato societario (fs. 92).

En otro orden de ideas, expresa que no resulta de aplicación al caso la tesitura fijada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el conocido precedente “Fiat Concord” (fs. 91 vta./92).

Asimismo, cuestiona que en la presente causa no se verifica la comisión del ilícito fiscal de la omisión del pago de impuesto tipificado por el art. 45 de la norma ritual, e incluso menciona -desde un punto de vista teórico- la posible existencia de un error excusable que dicha norma admite (fs. 93 vta./94).

Por último, plantea el caso federal, ofrece prueba documental (la que obra agregada a f. 2/20 y fs. 42/86 vta.), testimonial y pericial contable y, finalmente, peticiona se dicte sentencia revocando la resolución apelada, con costas al Fisco Nacional.

II. Que, a fs. 122/134 el Fisco Nacional contesta el traslado del recurso, desestima los agravios de la recurrente, ratifica en todas sus partes la resolución determinativa de oficio que motiva las presentes actuaciones, solicitando el rechazo del recurso impetrado por las razones de hecho y de derecho que expone, y acompaña las actuaciones administrativas.

Asimismo, se opone a la prueba documental acompañada por la parte actora, en tanto no fuera acompañada durante la instancia administrativa previa y/o estuviere debidamente certificada, también se opone a la prueba testimonial y a la pericia contable. Por último, plantea el caso federal y pide se confirme la resolución recurrida, con costas a la actora.

III. Que, a fs. 136 se confirió traslado a la recurrente de la oposición a la prueba formulada por el Fisco Nacional, el que fuera contestado por la actora a fs. 138/140 vta.

Posteriormente, a fs. 146 se dispuso la apertura a prueba de la presente causa, admitiéndose la oposición formulada por el Fisco Nacional respecto de la prueba testimonial, teniéndose presente la prueba documental acompañada por la parte actora y haciéndose lugar a la producción de la prueba pericial contable, la que se encuentra agregada a fs. 168/175.

A fs. 176 obra la impugnación del referido informe efectuada por la representación fiscal y, previo traslado de fs. 179, las contestaciones de la recurrente (fs. 180), su perito contador (fs. 187/189), así como también del perito contador del Fisco Nacional (fs. 190/191 vta.).

IV. Que, a fs. 199, se declara la clausura del período probatorio, y se elevan los autos a consideración de la Sala “B”, la que dispuso poner las presentes actuaciones para alegar.

A fs. 200/208 y 209/210 obran agregados los alegatos de la parte actora y del Fisco Nacional, respectivamente.

V. Que, a fs. 213 se pasan las presentes actuaciones para sentencia.

VI. Que, en principio, debe precisarse que los jueces no están obligados a seguir a las partes en todas sus argumentaciones, sino tan sólo pronunciarse acerca de aquellas que estimen conducentes para sustentar sus conclusiones (conf. C.S.J.N., in re: “Sopes, Raúl Eduardo c/Administración Nacional de Aduanas”, sentencia del 12/2/87, “Stamei S.R.L. c/Universidad de Buenos Aires s/Ordinario”, sentencia del 17/11/87, C.N.C.A.F., Sala V, in re “Werner Tomás M. c/B.C.R.A. s/ Proceso de Conocimiento”, sentencia del 27/4/98 y “Congelados Macchiaiavello y Cía. S.A.” del 26/4/2007, entre otros).

VII. Que, de acuerdo a lo expuesto precedentemente, debe este Tribunal abocarse al tratamiento de la cuestión de fondo, referida a la impugnación efectuada por el Fisco Nacional respecto de la celebración de un contrato de comodato de inmueble entre la recurrente y su presidente y/o accionista mayoritario durante los períodos fiscales 2009 a 2012, considerada dicha operación por el Fisco Nacional como una disposición de fondos a favor de terceros en los términos del art. 73 de la ley del Impuesto a las Ganancias.

Por un lado, el Fisco Nacional interpreta que el Sr. Miguel Ángel Manuel Broda, presidente y accionista mayoritario de la sociedad Macro Fundamentals S.A., así como su esposa, revisten el carácter de terceros respecto de la aquí recurrente y que la operación celebrada entre la sociedad y las personas humanas mencionadas por medio de la cual **se facilitó el uso gratuito con destino a casa habitación de estas últimas no resulta en el interés de la empresa, razón por la que surge la aplicación de la disposición normativa anteriormente apuntada -art. 73 de la Ley N° 20.628 (t.o. en 1998 y sus modificaciones) y el art. 103 de su decreto reglamentario-**.

Por su parte, la recurrente, aun cuando reconoce la operación, argumenta que su presidente y accionista mayoritario, así como la esposa de éste no revisten el carácter de “terceros” ajenos a la empresa pues, son sus propios accionistas.

En ese orden, conforme dispone el art. 73 de la Ley N° 20.628 (t.o. en 1998 y sus modificaciones) –en lo que aquí interesa– *“toda disposición de fondos o bienes efectuados a favor de terceros por parte de los sujetos comprendidos en el artículo 49, inciso a), y que no responda a operaciones realizadas en interés de la empresa, hará presumir, sin admitir prueba en contrario, una ganancia gravada equivalente a un interés con capitalización anual no menor al fijado por el BANCO DE LA NACION ARGENTINA para descuentos comerciales o una actualización igual a la variación del índice de precios al por mayor, nivel general, con más el interés del OCHO POR CIENTO (8 %) anual, el importe que resulte mayor”* (el subrayado es propio).

Asimismo, –y una vez más, en lo que aquí interesa–, el art. 103 del DR N° 1344/98 establece que *“(a) efectos de la aplicación del artículo 73 de la ley, se entenderá que se configura la disposición de fondos o bienes que dicha norma contempla, cuando aquéllos sean entregados en calidad de préstamo, sin que ello constituya una consecuencia de operaciones propias del giro de la empresa o deban considerarse generadoras de beneficios gravados”* (el destacado es propio).

Ahora bien, resulta ilustrativo apuntar, que tal como lo ha señalado la jurisprudencia de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, de modo preliminar resulta necesario verificar la concurrencia de tres requisitos básicos para que el art. 73 de la ley del gravamen resulte de aplicación a un caso concreto: a) la disposición de fondos a favor de un tercero, b) que dicha disposición sea efectuada por un sujeto comprendido en el inciso “a” del art. 49 de la ley de impuesto a las ganancias y, c) que esas operaciones no sean realizadas en interés de la empresa (cfr. “Antolín Fernández S.A. c/ DGI”, CNACAF, Sala V, 30/12/2010; “Akapol”, CNACAF, Sala V, 09/03/2005; “Merlino Automotores S.A.”, CNACAF, Sala I, 12/03/2009; “Servando Pedrido S.A.I.C.yF.”, CNACAF, Sala III,

11/10/2005; “Lemiro Pablo Pietroboni S.A.”, CNACAF, Sala IV, 05/07/2007).

En el caso particular, no se encuentra en discusión el requisito contemplado en el punto b) precedentemente mencionado. Por el contrario, sí se discuten los dos requisitos restantes; vale decir, el carácter de terceros o no que pueden revestir respecto de la empresa, su presidente y accionista mayoritario (también su esposa) y, si en definitiva, el “contrato de comodato” celebrado entre la sociedad y los mencionados en último término fue o no realizado en interés de la empresa otorgante.

En relación al punto a), el planteo efectuado por la recurrente no tiene asidero jurídico alguno, resultando evidente la diferenciación entre la sociedad y los socios, atento la separación de personalidades existentes, establecida tanto en el derecho societario que regula su existencia, encaminado a distinguir -en un estricto sentido jurídico- a dicha sociedad de aquellos sujetos, personas humanas o jurídicas, que participan de su formación y/o adquieren posteriormente algún tipo de participación en ella, así también como en la legislación en materia tributaria.

Ello así, corresponde concluir que el hecho de que los destinatarios de la entrega del inmueble sean su accionista mayoritario y su esposa, no enerva la aplicación del artículo en cuestión, tratándose de terceros respecto de la sociedad.

Sentado ello, corresponde analizar si la entrega del inmueble era en interés de la empresa -punto c-.

Cabe poner de relieve que Macro Fundamentals S.A. -la aquí recurrente- fue creada por escritura pública el 20/10/2003 e inscripta en la Inspección General de Justicia el 12 de noviembre de 2003, conforme se desprende de la documentación aportada por la recurrente (cfr. fs. 697/707 AA, Cuerpo IV Ganancias 2009/2012). Su capital se estableció en la suma de doce mil pesos, del cual fue integrado en dicho acto solamente el mínimo legal (veinticinco por ciento) del capital suscrito. Desde su creación, tuvo **tres accionistas**; el Sr. Miguel Ángel Manuel Broda (y Presidente), y sus hijas, la Srta. Andrea Broda (y Directora Titular) y la Srta. Vanessa Broda (y Directora Titular), detentando el 90%, el 5% y el 5% del capital social, respectivamente. Por su parte, la Sra. Elsa Ana Duriatti, esposa del Sr. Broda, detentó en aquella oportunidad el cargo de Vicepresidente de la empresa. **No se aportó bien alguno -ni registrable ni ningún otro bien-, salvo tres mil pesos en efectivo** y la promesa de integrar la diferencia dentro del plazo legalmente establecido.

En breve, Macro Fundamentals S.A. se encontraba integrada por la familia Broda, o mejor dicho, la forma jurídica bajo la cual dicha familia decidió encarar sus servicios y/o negocios de asesoramiento, con la participación preeminente del Sr. Broda. El objeto social radica en el asesoramiento integral para empresas, auditorías y consultaría empresarial (macro y micro economía) administración y recursos humanos incluyendo investigación de mercado, etc. **No aparece como objeto social el alquiler de inmuebles o cualquier otra actividad inmobiliaria.**

En lo que puntualmente se refiere a la operatoria relacionada a la adquisición y utilización del inmueble que generara el ajuste en materia de disposición de fondos a favor de terceros en los términos del art. 73 de la ley del gravamen, cabe destacar que el mismo fue adquirido mediante escritura pública de fecha 26/10/2006 -esto es, tres años después de la constitución de Macro Fundamentals S.A.- por la suma de **US\$ 1.530.000.-** (dólares estadounidenses un millón quinientos treinta mil). Dicha escritura tuvo como antecedente la transferencia de dos boletos de compraventa de fecha 10/04/2006 por los cuales el Sr. Broda había adquirido dicho inmueble abonando la suma de US\$ 930.000.- (dólares estadounidenses novecientos treinta mil) con anterioridad al otorgamiento de la escritura traslativa y por el saldo de precio, esto es, la suma de US\$ 600.000.- (dólares estadounidenses seiscientos mil), se

constituyó un derecho real de hipoteca, posteriormente cancelado el 11/09/2007 (cfr. fs. 61/76 AA, Cuerpo I Ganancias 2009/2012).

Ahora bien, cabe resaltar que conforme expone la recurrente el 25/03/2013 durante la instancia fiscalizadora: “desde el momento mismo de su adquisición, dicho inmueble constituye la **casa habitación del Sr. Miguel Ángel BRODA y su Sra. esposa, no percibiendo la sociedad importe alguno por concepto de alquiler dado que se trata de una entrega en uso a título gratuito**” (cfr. fs. 85 AA, Cuerpo I Ganancias 2009/2012), en otras palabras, no se encuentra controvertido que la familia Broda habitaba el inmueble en cuestión y que no abonaba monto alguno a la sociedad en concepto de alquiler.

En ese escenario, corresponde que la aquí recurrente acredite que existía un interés de la empresa en esa disposición de bienes por parte del accionista, cuestión que no se ha logrado en autos.

En cuanto a la cancelación del derecho real de hipoteca con el producido de la venta de un inmueble de su propiedad ubicado en la calle Echeverría de esta ciudad que alega el recurrente, cabe destacar que si bien la escritura traslativa de dominio del inmueble ubicado en la calle Echeverría fue otorgada en fecha 12/12/2007, esto es, tres meses después de la cancelación de la hipoteca por parte de Macro Fundamentals S.A., las autorizaciones otorgadas por el juez del proceso sucesorio para la celebración de la operación de compraventa datan de los primeros días del mes de septiembre de 2007 (cfr. fs. 91/113 AA, Cuerpo IV Ganancias 2009/2012).

Ahora bien, cabe señalar que si el Sr. Broda facilitó el dinero para la cancelación del saldo de hipoteca de la aquí recurrente debió haber expresado su acreencia con la sociedad en su declaración jurada del impuesto a las ganancias del período fiscal correspondiente, lo que no realizó oportunamente ni tampoco a la fecha en que se confeccionara el informe final de inspección varios años después (cfr. fs. 617, Informe Final de Inspección, AA, Cuerpo IV Ganancias 2009/2012). Aún así, dicha circunstancia no otorgaba derecho al Sr. Broda ni se constituía en una obligación en cabeza de la aquí recurrente para disponer de un inmueble de su propiedad a título gratuito y sin que dicha operación generara renta alguna a su favor.

De la prueba aportada por la parte actora no se logra acreditar que la disposición de bienes implicó un beneficio para la sociedad ni que resultó necesario efectuar tal disposición para el cumplimiento del giro normal de la empresa. Es más, **el hecho de que este sea accionista mayoritario, que además reviste el carácter de presidente, no justifica que la recurrente, un sujeto de derecho comercial, cuyos actos son onerosos dispondría gratuitamente, además de abonar los dividendos y/u honorarios correspondientes, del único inmueble de su propiedad para uso de dicho accionista/presidente y su esposa**, los que claramente revisten el carácter de terceros respecto del propio ente, y sin que la disposición del inmueble redunde en un beneficio para la empresa disponente, indistintamente del título formal por el cual se efectúe la referida disposición.

A mayor abundamiento, y teniendo en consideración que la recurrente plantea la aplicación al caso de marras de una consulta vinculante emitida por la asesoría jurídica del ente el 20/10/2005 (Dictamen DI ALIR N° 4/2005, cfr. fs. 85/86 vta., autos principales), dicha argumentación debe ser descartada de plano. Ello así, toda vez que el contexto fáctico y jurídico que condujo al organismo recaudador a dictaminar en un caso concreto que la cesión gratuita (comodato) de determinados módulos del inmueble a construir y explotar por la sociedad consultante no constituían una disposición de fondos a favor de terceros tuvo basamento en el hecho de que para construir el inmueble en cuestión, dicha sociedad solicitó un crédito hipotecario, el cual fue otorgado por la entidad bancaria bajo

condición de que el 75% de las unidades destinadas a locación fueran, en efecto, alquiladas antes del desembolso dinerario por parte de la referida entidad financiera. Solamente en ese contexto, y previa celebración de los respectivos contratos de alquiler, es que la consultante bonificó a los locatorios con un contrato de comodato por el plazo de sesenta meses a contar desde la finalización del primer contrato de alquiler, supuesto que en absolutamente nada se asemeja a la cuestión ventilada en autos.

En este contexto, entiende este Tribunal asiste razón al Fisco Nacional cuando sostiene que la utilización del referido inmueble de propiedad de la aquí recurrente por parte del accionista mayoritario y presidente, y su esposa, debe ser considerada una disposición de fondos a favor de terceros ajeno al interés de la empresa y por tanto, resulta de aplicación al caso de marras el dispositivo previsto en el art. 73 de la Ley del Impuesto a las Ganancias (t.o. en 1998 y sus modificaciones), razón por la que el ajuste fiscal, en este sentido, debe ser confirmado, con costas.

VIII. Que, en cuanto a los intereses resarcitorios, sólo cabe su confirmación respecto de los intereses por el capital que se confirma, recordándose que los mismos constituyen una indemnización debida al Fisco, como resarcimiento por la mora en que ha incurrido el contribuyente o responsable en la cancelación de sus obligaciones tributarias. (cfr. CSJN, Citibank NA c/ DGI, 01/06/2000).

IX.- Que, en virtud del modo en que se resuelve, resta expedirse respecto del aspecto infraccional.

Cabe destacar que conforme surge de los considerandos citados ha quedado demostrado de forma acabada la materialidad de la infracción cometida por la quejosa, lo que se tradujo en la presentación inexacta de la correspondiente declaración jurada, y la consecuente falta de pago del impuesto en su justa medida lo que conforma el tipo objetivo descripto por la norma infraccional. Ahora bien, el tipo infraccional contemplado en el artículo 45 de la ley procedimental, requiere para su configuración del elemento culposo.

En efecto, en el caso ha quedado acreditada la materialidad de la infracción con la confirmación de la determinación de oficio de la obligación tributaria y podría eximir su responsabilidad sólo acreditando la eventual existencia de un “error excusable”.

Cabe recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dispuesto en el fallo Casa Elen-Valmi de Claret y Garelo de fecha 31/03/1999 *“esta Corte ha reconocido en numerosas oportunidades que en el campo del derecho represivo tributario rige el criterio de la personalidad de la pena que, en su esencia, responde al principio fundamental de que sólo puede ser reprimido quien sea culpable, es decir aquel a quien la acción punible pueda ser atribuida tanto objetiva como subjetivamente (Fallos - T. 271 - pág. 297; T. 303 - pág. 1548; T. 312 - pág. 149). Si bien, por lo tanto, es inadmisibles la existencia de responsabilidad sin culpa, aceptado que una persona ha cometido un hecho que encuadra en una descripción de conducta que merezca sanción, su impunidad sólo puede apoyarse en la concreta y razonada aplicación al caso de alguna excusa admitida por la legislación vigente (Fallos - T. 316 - pág. 1313; causa L.269.XXXII " Lambruschi, Pedro Jorge s/L. 23771", fallada el 31/10/1997).*

9) Que por lo tanto, toda vez que en el caso ha quedado acreditada la materialidad de la infracción prevista por el artículo 45 de la ley 11683 (texto citado) con la determinación de la obligación tributaria que ha quedado firme -de la que resulta la omisión del pago de impuestos y la inexactitud de las declaraciones juradas presentadas por la actora- la exención de responsabilidad sólo podría fundarse válidamente en la concurrencia de alguna de las circunstancias precedentemente aludidas. En orden a ello, cabe precisar que en lo referente a la eventual existencia del "error excusable", previsto por dicha norma, la

sentencia únicamente fórmula una referencia indirecta, que no puede reputarse como un juicio concreto a ese respecto (cfr. fs. 246 "in fine")”.

En el caso particular, del examen de los hechos y de las constancias arriadas permiten advertir la presencia de los supuestos requeridos para la configuración del ilícito en cuestión y su atribución a la apelante, quien no ha presentado pruebas o invocado factores atendibles, eximentes o atenuantes de su responsabilidad. A ese efecto, resultan suficientes las comprobaciones incluidas en las presentes actuaciones. Por lo expuesto corresponde confirmar la multa, con costas.

No obstante ello, con relación al quantum de la multa aplicada, si bien la graduación de la pena es discrecional del juez administrativo en función de las circunstancias de la causa, obviamente no queda exenta de la revisión posterior que este Tribunal pueda realizar de la aplicación de dicha facultad punitiva como juez revisor de la razonabilidad del acto sancionatorio. Ello así se observa que el Juez Administrativo fijó la misma en el 70% del tributo determinado, sin dar mayores fundamentos para justificar esa graduación por encima del mínimo contemplado en la norma legal, sumado ello al hecho de que no surge de las actuaciones administrativas que corren por separado que el recurrente tenga antecedentes sumariales previos, razón por la cual se estima procedente reducir la misma al mínimo legal previsto por el artículo 45 de la ley ritual. Con costas en la proporción que se confirma y por su orden en lo que se reduce.

Por ello, SE RESUELVE:

1) Confirmar la resolución apelada, con costas, salvo en lo que hace a la reducción de multa que se establece por su orden.

2) Regular los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, por su actuación en autos en la suma de \$51.970 (pesos cincuenta y un mil novecientos setenta) por la representación procesal y de \$129.924,09 (pesos ciento veintinueve mil novecientos veinticuatro con nueve) por el patrocinio letrado; montos regulados según el monto del litigio, la labor desarrollada, por la primer etapa efectivamente cumplida por los profesionales beneficiarios; de conformidad con lo dispuesto en la Ley 21.839, modificada por la Ley 24.432, vigente al momento en que se cumplieron las tareas profesionales en autos por dicha etapa, a cargo de la parte actora.-

3) Regular los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, por su actuación en autos de conformidad con el monto del presente litigio, la ponderación de la extensión y la calidad de la labor profesional desarrollada como así también de las particularidades de la cuestión planteada, el resultado obtenido; por las restantes etapas efectivamente cumplidas por los profesionales beneficiarios teniendo en cuenta las pautas fijadas por los artículos 16, 20, 22, 24, 29, 52 y cc de la Ley 27.423, en la suma de \$ 192.414,21 (Pesos ciento noventa y dos mil cuatrocientos catorce con veintiuno) equivalente a la cantidad de 66,30 (sesenta y seis con treinta) UMA por la representación procesal; y en la suma de \$481.035,52 (Pesos cuatrocientos ochenta y un mil treinta y cinco con cincuenta y dos) equivalente a la cantidad de 165,76 (ciento sesenta y cinco con setenta y seis) UMA, por el patrocinio letrado, a cargo de la parte actora.-

4) Regular los emolumentos del Contador Rafael De Luca en la suma de \$257.751,99 (pesos doscientos cincuenta y siete mil setecientos cincuenta y uno con noventa y nueve centavos) equivalente a 88,82 (ochenta y ocho con ochenta y dos) UMA, en su carácter de perito contador a cargo de la parte actora.

5) Se deja constancia que las presentes regulaciones no incluyen el I.V.A. el que se adicionará en el caso de corresponder, conforme a la subjetiva situación de revista del

profesional beneficiario frente a dicho tributo, conf. C.S.J.N., 16-6-93, en “Cía. Gral. de Combustibles”

Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos acompañados, y archívese.

ARMANDO MAGALLÓN

Vocal

JOSÉ LUIS PÉREZ

Vocal

PABLO A.PORPORATTO

Vocal